

que no se pueda rechazar del todo el artículo en debate, salvo que se haga con el objeto de ocuparnos de aquel; porque rechazar éste en lo absoluto, sería rechazar el principio de inspeccion, vigilancia y revision, que es la base de nuestro sistema de gobierno.

No creo, pues, que habrá inconveniente, como dije enantes, para que la votacion se divida en dos partes.

La primera dice: «Los concejos provinciales inspeccionan y vigilan los procedimientos de los de distrito, y conocen en revision de las resoluciones de éstos. Hasta allí no hay inconveniente en aprobar.

La segunda parte, que somete los actos de los concejos de provincia á la revision del gobierno, se puede rechazar, si llevamos el propósito de aprobar la segunda parte del artículo propuesto por la comision.

Si todas las autoridades que ejercen el poder municipal constituyen un orden gerárquico, no hay razon para romper este orden, y lo natural es que del concejo de distrito se pase al provincial, y de éste al departamental, que pide termine en el supremo gobierno, que es el representante de la nacion. En los diversos artículos que constituyen el proyecto de ley municipal y de que se ocupará más tarde la honorable Cámara, se indican los casos y la forma de la revision, disponiendo que el concejo procederá de tal modo y so meterá el acto á la revision de la junta departamental, ó directamente á la aprobacion del gobierno.

Por ejemplo: el presupuesto de rentas y gastos lo formula el concejo, segun la ley, y lo somete á la aprobacion del gobierno. En la ley modificada la comision propone se someta á la aprobacion de la junta departamental. Como en las diversas disposiciones del proyecto se indica el modo como se verificará la revision, insisto en que se apruebe la primera parte del artículo en debate, y se rechace la segunda, para aprobar la parte final del artículo propuesto por la comision.

El Sr. Presidente.—Antes de votar se va á leer el artículo, que se ha debatido y el que contrapone la comision.

El Sr. Secretario leyó.

El señor Forero.—Pido que la votacion se haga por partes.

El Sr. García Calderon.—Me parece mas difícil rechazar ese artículo y entrar en la discusion del que lo sustituye.

El Sr. Forero.—Retiro mi indicacion, pero reservándome el dere-

cho de sostener la primera parte del artículo tercero, caso de que se comitiese.

Después del debate, se procedió á votar el artículo y fué aprobado.

Se leyó y pasó en debate el que en sustitucion propone la comision.

El Sr. Rosas.—Pido, Excmo. señor, que antes de discutir este artículo, se mande á la comision para que le dé una forma conveniente. La última parte de ese artículo no puede estar peor redactada, autoriza para que el Gobierno intervenga en todas las revisiones, cuando en realidad no debe hacerlo sino en ciertos asuntos.

Por su mala redaccion se discutirá pues largamente, sin que llegue nadie á formarse una idea clara de la disposicion que contiene. Volviendo á la comision puede ésta, de hoy á mañana darle una forma conveniente, que facilite la discusion.

La comision retiró el artículo con el objeto indicado.

Después de lo cual, S. E. levantó la sesion, manifestando antes la necesidad de abrir las sesiones á la hora de reglamento, á fin de qué puedan ser resueltos los diversos asuntos de que ha de ocuparse la H. Cámara.

Eran las 5 y 30 p. m.

Por la redaccion.

J. OCTAVIO OYAGUE,

18.ª sesion del Mártes 19 de Agosto de 1890.

(Presidencia del H. Sr. Candamo.)

Abierta la sesion con asistencia de los SS. Senadores: Quiñones, Ibarra, Elguera, Solar, Rosas, Bamberén, Samanéz, Torrico, García Calderon, Recabarren, Delgado, Carranza, Morote, Lama T., García, Villanueva, Alarco A., Mujica, Oastillo, Torres, Menendez, Alarco L., Muñoz, Villagarcía, Leon, Olavegoya, Oárdenas, Izaga, Arbulú, La Torre Gonzalez, Cisneros, Ganoza, Oanevaro, Revoredo, Najar, Lama G., Varela y Valle, Velez, Seminario, Montero, Elguiguren, Ocampo, Valdez, Bejarano, Forero, Ward, Pinzas y Vizcarra secretarios, fué leida y aprobada el acta de la anterior con la aclaracion del señor Valdez, de que opinó en favor del artículo del dictámen, que establece la revision de los actos de los Concejos Provinciales por las Juntas de Departamento.

Se dió cuenta de lo siguiente:

De un oficio del señor Gadea pidiendo licencia por el término de un mes, con el fin de atender al restablecimiento de su salud.

A la órden del día.

De la sustitucion presentada por la comision de Gobierno, al artículo 3.º del proyecto sobre reforma de la ley de Municipalidades.

A la órden del día.

Antes de la orden del día el señor Canevaro, pidió se oficiase á la honorable Cámara de Diputados, recomendándole el despacho del proyecto que en la Legislatura última se mandó en revision, relativo á un aumento proporcional en los haberes de los militares, en servicio activo.

Así se dispuso.

El señor Bejarano pidió que con acuerdo de la Cámara se llamase al señor Zela Videl Senador suplente por el Departamento de Ancachs.

S. E. indicó que aun no se había resuelto acerca de la licencia solicitada por el propietario.

ORDEN DEL DIA.

Se puso en discusion el oficio del señor Gadea, y despues de algunas indicaciones hechas por S. E. el Presidente de la honorable Cámara, acordó conceder el permiso con goce de dietas.

Sometido á la decision de la Cámara el pedido del señor Bejarano, su señoría no insistió en él á mérito de las observaciones que hizo el señor Lama G.

Se leyó y puso en debate la sustitucion al artículo 3.º del proyecto sobre reforma de la ley orgánica de Municipalidades.

El señor Canevaro.—Yo creo que ahora queda el artículo en peor condicion que antes; tal como estaba redactado primitivamente decía que las Juntas Departamentales revisarían los actos de los Concejos Provinciales, y solo cuando hubiese des acuerdo, se apelaría al Gobierno; pero ahora, segun parece, el Gobierno debe revisar todos los actos de las Juntas Departamentales y esto dá lugar á que se confunde la ley Municipal con la ley de Juntas Departamentales.

El señor Villanueva.—Excmo. señor: Cuando se habla de la revision que el Gobierno debe ejercer sobre los actos de las Juntas Departamentales en la presente ley, indudablemente se refiere ésta al género de revision que el Gobierno debe ejercer en el órden municipal. No me parece que hay peligro de que se confunda una ley con otra y si el honorable se-

ñor Canevaro se fija bien en los términos del artículo propuesto, desamparecerá la duda que tiene.

El señor Canevaro.—No he sido bien comprendido. Oreo que el artículo como estaba (anteriormente era mas claro; se veía allí que las juntas departamentales iban á revisar los actos de los concejos provinciales y cuando la resolucion no fuera del agrado de éstos les quedaba la facultad de apelar al Gobierno.

Me parece mejor esa forma, porque tal como está redactada ahora, un concejo de distrito podrá ir hasta el Supremo Gobierno, es decir, que se les dá tres instancias; y en mi concepto es mejor que los asuntos de los concejos de distrito fenezcan en las juntas departamentales y los de provincia ante el Gobierno.

Tal como está concebido el artículo no solo se confunde una ley con otra, sino que á mas de esta confusion, se va á dar tres instancias á los concejos de distrito, cuya cuantía de intereses estan pequeña, que no merecen llevarse hasta el Gobierno asuntos de esa naturaleza.

El señor Valdez.—Tenga la bondad de leer el señor secretario el artículo cuarto.

(El señor secretario leyó)

El señor Valdez.—Yo creo, Excmo. señor, que ese artículo responde á la duda expresada por el honorable señor Canevaro. Allí están determinados los casos en que se apela al Gobierno.

El señor Villanueva.—Tenga la bondad de leer el señor secretario el artículo tercero anterior de la comision.

(El señor secretario leyó.)

El Sr. Pinzas.—Excmo. Sr. Yo creo efectivamente que el honorable señor Canevaro, que esta ley confunde la de municipalidades con la de descentralizacion. Las mismas atribuciones se les dá á ambas entidades; luego se vá á incluir en la ley municipal un algo que se relaciona exclusivamente con la ley de descentralizacion fiscal.

Ademas, en nuestras leyes no debemos andar escatimando mucho la claridad, porque lejos de aquí produce inconvenientes muy graves. La oscuridad de la ley hace que se interpreten al revés todas las cosas, para crear dificultades á los concejos.

Por eso yo suplicaría á los señores de la comision, que le diesen al artículo algo de mas claridad, aunque para ello se tenga que emplear mayor número de palabras; pero debemos consultar la claridad antes que la belleza del estilo.

El Sr. Villanueva.—Cualquiera que fije su atencion en el artículo, verá con bastante claridad, que no es posible se realice la confusion de la ley de descentralizacion fiscal con la presente. Las mismas funciones ejercen las juntas departamentales respecto de los concejos provinciales, que el Gobierno respecto de los actos de las juntas departamentales, esto dice el artículo y se refiere á la inspeccion y vigilancia que los concejos de provincia ejercen sobre los actos de los de distrito y el Supremo Gobierno sobre los de las juntas departamentales.

El Sr. Pinzás.—Precisamente el antecedente establecido es el que introduce la confusion, la consecuencia que se desprende. «Los procedimientos»—esa palabra es muy general, así es que teniendo el Supremo Gobierno la misma facultad respecto de las juntas departamentales, es claro que segun este artículo va á inspeccionar todos los actos de las juntas departamentales; no se refiere simplemente á la inspeccion y vigilancia de los actos de los concejos provinciales. Es el antecedente, pues, el que viene á producir la confusion en sus relaciones con la consecuencia.

El Sr. Forero.—Tenga la bondad de leer el Sr. Secretario el artículo.

El Sr. Secretario (leyó.)

El Sr. Forero.—Excmo. Sr.: para mí el artículo es completamente claro y guarda perfecta armonía, tanto con el espíritu de la ley municipal, cuanto con el pensamiento que dominaba ayer en la H. Cámara.

Los Concejos Provinciales, dice, si no es mala mi memoria, inspeccionan y vigilan los procedimientos de los Concejos de distrito, y revisan las resoluciones de éstos. Hay aquí, pues, tres funciones: 1.ª inspeccion, 2.ª vigilancia, ambas son medios indispensables para llegar, en su caso, á la tercera, que es la revision.

¿Qué inconveniente hay para que ejerzan estas tres funciones las Juntas Departamentales respecto de los actos de los Concejos Provinciales?

La palabra actos comprende no solo los procedimientos, sino tambien las resoluciones que caen bajo la inspeccion, la vigilancia y la revision. ¿Y qué inconveniente hay para que el Supremo Gobierno ejerza esas mismas tres funciones respecto de los actos de las Juntas Departamentales? Si es necesario establecer en la ley el procedimiento gerárquico que constituye el órden administrativo, no veo ningun inconveniente en que se apruebe el artículo de la comision.

El que se permita á las Juntas De-

partamentales revisar los actos de los Concejos Provinciales, no es ciertamente confundir la ley de organizacion de las Juntas con la ley de organizacion de los Concejos, así como no se confunden las leyes de organizacion de los Concejos con la Constitucion de la República, concediendo al poder ejecutivo la facultad de revisar los actos de las Juntas Departamentales. La intervencion en el acto para la simple revision, no es usurpacion, ni limitacion, sino ejercicio de los derechos que se derivan de la naturaleza de las mismas instituciones antes indicadas.

En la discusion he oido proponer algo que no es propio del punto que se discute; porque no se trata de las leyes adjetivas ó de los procedimientos que deben observarse para la revision; se trata solamente de una ley sustantiva, esto es, de la declaracion solemne de un derecho; y por eso el artículo se limita á declarar que los Concejos de Provincia tienen el derecho de revisar las resoluciones de los de distrito; que las Juntas Departamentales revisarán las resoluciones de los Concejos de Provincia y que el Gobierno á su vez revisará las resoluciones de las Juntas Departamentales, en los casos designados por esta ley, es decir, cuando se infrinja voluntariamente una ley, cuando se hiere un derecho manifesto del ciudadano, cuando se ataquen las altas conveniencias de las poblaciones, ó cuando concorra alguna de las otras causas que se mencionan en las diversas disposiciones del proyecto en debate.

Si se quiere limitar estas atribuciones, indicando otros procedimientos que deben observarse de preferencia y que se ha dado en llamar instancias, aunque impropriamente, convendría proponerlas cuando se trate de las funciones especiales de cada una de las entidades municipales.

Quando se trate, por ejemplo, de las funciones del Alcalde, vendrá bien la indicacion de que el Alcalde pueda resolver por sí solo, sin apelacion ni revision, los asuntos que no pasen de tal cuantía. Tratándose de los concejos provinciales y de las atribuciones que se les otorgue, puede establecerse tambien que fallarán sin mas trámite los asuntos que no excedan de cierta cantidad, y así sucesivamente; pero en este momento, que solo discutimos el artículo en que la comision propone la declaracion de un derecho fundamental en la organizacion municipal, no vienen al caso, en mi humilde juicio, las reflexiones que se han hecho; porque

éstas tendrán lugar en otra estación del debate.

Aprovecharé de la circunstancia de estar con la palabra, para manifestar que las revisiones de que se trata, no atacan de modo alguno la independencia municipal. Yo, francamente hablando, no comprendo lo que bajo la frase de independencia del Poder Municipal se entiende en este momento. Yo he creído siempre que esa independencia consiste en tener vida propia. Si la Municipalidad se constituye sin que el Ejecutivo intervenga en la elección de sus miembros, y cuenta con los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, disfrutará de una existencia propia, y será independiente; y el Gobierno no se resolvería a destruirla ni a embarazarla, ni aun en los momentos de pasión exagerada.

El Poder Municipal emanado de la fuente de todo poder social, esto es, de la voluntad del pueblo, es, por ese solo hecho, independiente, puesto que su existencia no depende de otra autoridad; pero no se puede llevar la independencia de ese poder hasta constituir una entidad absoluta, aislada y sin obediencia gerárquica, por que perturbaría completamente el orden de las ideas sobre la materia.

La vida de vecindad, Excmo. señor, despierta naturalmente tres imperiosas necesidades: la seguridad personal, la paz ó la tranquilidad de la comunidad, y el bienestar de ella. Estas tres primordiales necesidades deben llenarse de una manera satisfactoria mediante la existencia de una autoridad que toma el nombre de Poder Municipal, y cuyo ejercicio se llama administración local, naturalmente sometida á las condiciones que se derivan de su propia naturaleza, y que deben conformarse con los intereses generales, obediendo á esos principios cuyo conjunto constituye el fundamento de las sociedades, y sin los cuales no hay unidad nacional ni orden posible en los Estados, ni garantías para las mismas asociaciones locales, ni libertad, ni seguridad para los ciudadanos.

¿Qué significaría ese conjunto de sociedades aisladas ó independientes? Yo no lo comprendo. Si se pudiera indicar un distrito cuyos intereses no se relacionasen absolutamente con los de Provincia: si se pudiera señalar una provincia cuyos intereses no tuvieran el mas leve contacto con los del Departamento; y si hubiera algun departamento cuyos intereses no se rozasen con los de la República, en tal caso comprendería esa independencia absoluta

que se quiere atribuir á los simples municipios; pero estando los intereses de éstos intimamente ligados á los del país, y teniendo cada localidad el derecho de defender los suyos propios, es necesario establecer la gerarquía que existe en todas las sociedades bien organizadas.

Si se quiere que las municipalidades conserven sus derechos y no invadan las ajenas, no se puede desconocer la necesidad de la inspección, de la vigilancia y de la revisión que constituyen el fundamento esencial de los Gobiernos democráticos. Derivándose el orden gerárquico de la naturaleza misma de la institución, repito que no comprendo lo que significa la absoluta independencia de las diversas entidades municipales que la componen. La independencia no admite mas extension que la del derecho propio, y el ejercicio de ese derecho requiere la gerarquía, que trae consigo la necesidad de la revisión por una autoridad inmediatamente superior.

Si se temen abusos, lo natural no es perturbar los principios fundamentales de la sociedad, sino sancionar preceptos que contengan esos abusos y los repriman como es debido. La ley debe tender á limitar cuanto sea posible los casos de revisión, atendiendo á las condiciones de los pueblos, al estado de instrucción de sus individuos, al patriotismo que hubiesen manifestado en las diversas corporaciones de que formaron parte alguna vez. Estas circunstancias servirán para otorgar mas ó menos libertad, y mas ó menos concesiones respecto al manejo de los intereses locales; pero no sería prudente autorizar á que dispongan de ellos de una manera absoluta los concejos de distrito y de provincia, sin que las juntas departamentales ó el Gobierno examinen su conducta en la forma que se estime conveniente, á fin de que se respeten las intereses de otras entidades igualmente sagradas.

Volviendo al artículo en debate, en el que se vé con suma claridad, que estan perfectamente destinadas las atribuciones de que se ocupa, manda que los superiores inspeccionen y vigilen los procedimientos de los inferiores, es decir, impone á los primeros la obligación de un estudio constante de la conducta de los Concejos Provinciales y de los de distrito, para que, en su caso, revisen las resoluciones que se expidan. Tal revision no ha menester, como en los juicios ante los Tribunales, de un recurso de apelacion especial. Pueden las entidades superio-

res avocarse al conocimiento de las resoluciones que manifestamente hieran los intereses públicos, sin que haya habido reclamacion previa de algun individuo ó funcionario. El Supremo Gobierno, viendo que un concejo adopta una resolucion, en que dispone ilegalmente de sus intereses ó hace de ellos aplicaciones impropias, puede dictar otra resolucion revocando la del concejo, y disponiendo el exacto cumplimiento de la ley y el respeto á los intereses locales. Tal es el resultado de la inspeccion y la vigilancia.

Quando se trata de intereses particulares, la cuestion varia de aspecto; y no es necesario el procedimiento de oficio, porque el individuo no se dejará atropellar, ó ira de escalon en escalon, procurando la defensa de sus derechos, hasta que sea atendido, ó hasta que desaparezca completamente la esperanza de conseguir reparacion.

Tratándose en este momento de declarar el derecho de revision, no hay necesidad de entrar en todos los detalles indicados, porque no envuelve el artículo en debate los temores insinuados por los honorables señores Oanevaro y Pinzás. Parece que sus señorías se fijan en que los últimos términos de dicho artículo facultan al Ejecutivo para tener fija la mirada, tanto sobre los concejos de distrito, como sobre los provinciales, pero yo no encuentro inconveniente en ésto; la mirada del Gobierno sobre la administracion pública debe ser general, y recorrer desde el último peldaño hasta la cima de la escala social, á fin de defender en cada uno de sus escalones los intereses del individuo y los de la sociedad. Aunque se le dé la interpretacion que dichos señores suponen, no veo el inconveniente que ellos indican, y á mi juicio la H. Cámara debe aprobar el artículo tal como lo ha presentado la comision. Los que creen que debe haber mas limitaciones que las designadas en el artículo cuarto, pueden en cada caso señalarlas, á fin de que el Senado las examine y las apruebe ó rechace. Quando se discutan las funciones de los concejos, se pueden indicar las limitaciones que convenga poner á las revisiones: lo mismo debe hacerse cuando se trate del Alcalde y de los diversos inspectores, si se quiere concederles facultades especiales; pero no es lícito combatir el artículo, que no es mas que la declaracion solemne de un derecho, porque desde ahora y de golpe no comprende

todas las restricciones que se estiman necesarias.

Si se considera que en la mayor parte de nuestros pueblos no existe el número de individuos aptos, que demanda el personal de los concejos; si se sostiene que es muy notable la falta de ilustracion en los que tendrían que desempeñar las funciones de concejales, no comprendo por qué se oponen á la inspeccion, vigilancia y revision, y pretenden otorgar una independencia absoluta, ó una autonomia completa que solo merecerian la competencia experimentada y el civismo acreditado. Estoy por el artículo de la comision en todas sus partes.

El señor *Pinzás*.—No me opongo á que exista esa especie de dependencia gerárquica de unos concejos á otros, hasta llegar al gobierno; lo que he dicho es que la última parte de este artículo no está en su sitio.

La primera parte contiene dos puntos: los concejos provinciales inspeccionan y vigilan los procedimientos de los distritos, (primer punto); y conocen de las revisiones, (segundo punto, luego hay dos facultades. El gobierno debe tener respecto á las juntas departamentales, la facultad que la última parte del artículo le concede; pero no veo razon para poner que debe inspeccionar y vigilar los procedimientos de la junta departamental. Eso, á mi juicio, no está en su sitio.

En cuanto á la independencia de que nos ha hablado al honorable señor Forero para llenar el fin social de su institucion, su señoría se ha ocupado simplemente de las restricciones que deben ponerse á los que componen el concejo; pero nó á los que ejercen la revision.

Ahora bien, como la corporacion revisora está compuesta de hombres que pueden cometer abusos, es preciso revestir á las que son inferiores en grado, de una garantía, ó poner alguna cortapisa á los interventores, en prevision de muchos abusos, que me consta se han cometido, y que han hecho inútil la existencia de las municipalidades.

Por eso desearía, que cuando se tratase el punto relativo al modo como deben intervenir las autoridades políticas, se combinase las cosas, de manera que no se ataque la existencia de las municipalidades.

El señor *Forero*.—Es materia de redaccion quitar la inspeccion y vigilancia de las juntas departamentales. Puede ponerse la misma revision, en vez de decir las mismas funciones.

El señor *Pinzas*.—Pero es preciso que quede confeccionado así, porque no se podría dejar á la comision de Redaccion que hiciera una variacion sustancial; así es que la Cámara debe resolver como crea conveniente.

El señor *Forero*.—Ahora he comprendido la objecion y creo que la comision no tendrá inconveniente en aceptar lo que indica su señoría.

El señor *García Calderon*.—Podemos ver en el artículo, tres partes: la primera establece la inspeccion, vigilancia y revision de los procedimientos de los concejos de distrito por los concejos provinciales; la segunda establece la inspeccion, vigilancia y revision de los actos de los concejos provinciales por las juntas departamentales; y la tercera establece las mismas funciones con respecto al gobierno.

Esta tercera parte es la que, á mi juicio, ha llamado la atencion de algunos Representantes. Para mí, simplemente está fuera de su lugar, no tiene objeto.

La accion del gobierno no puede desconocerla ninguna ley. El Congreso, segun la Constitucion, dicta las leyes, y el gobierno tiene la mision de hacerlas cumplir por medio de reglamentos, decretos y resoluciones y contra esa ley fundamental no se puede decir nada en las leyes secundarias.

Si tiene la atribucion principal y capital, para qué repetir que tendrá la misma funcion en este caso. Por el contrario, el repetirlo se presta á la duda. Supongamos que un acto del Concejo provincial ha sido revisado y aprobado por la junta departamental ¿con qué fin se pasa al Gobierno? Supongamos lo contrario, un acto aprobado por el Concejo provincial es desaprobado por la junta departamental; en este conflicto entra en la atribucion del Gobierno el pronunciar la última palabra; pero del artículo como está, se puede deducir que á la larga todo asunto municipal vendrá al Gobierno y entonces lo que habremos hecho, es complicar el mecanismo, poner una rueda mas.

Que en determinados casos lo resuelto por la junta departamental vaya al gobierno, está perfectamente bien; pero establecer en este artículo por regla general tres categorías distintas, es desnaturalizar la ley, y ponernos en el caso de que se interprete mal el asunto y se complique mas cuando lo que queremos es abreviar el despacho municipal. Por eso estoy en favor de la primera y segunda parte y en contra de la tercera.

De otro lado, olvidé decir ayer en el debate, que predomina en la Cámara una idea, á saber: la ampliacion de una ley vigente, que sancionamos por razones especiales y que ampliamente discutimos cuando se dictó: me refiero á la ley para la municipalidad de Lima. En ella se resolvió que dicha corporacion no dependería del Prefecto, sino directamente del Gobierno. Las ventajas que ha producido esta ley son notorias y á ninguno de los que vivimos en Lima se nos puede ocultar la conveniencia de esta excepcion.

Con respecto á los departamentos, debe darse una resolucion general, igual para todos; pero el Concejo de Lima debe vigilar á los de las demas provincias del departamento y á él debe inspeccionar y revisar sus actos el Gobierno, porque si hacemos que solo la municipalidad de Lima dependa del Gobierno, y las de las provincias queden dependientes de las Juntas departamentales, estableceremos un mecanismo en cierto modo complicado.

En Lima habrá quizás en el primer momento alguna dificultad, para que el Concejo provincial pueda ejercer aquella inspeccion y vigilancia sobre los concejos provinciales que no sean del Cercado; pero atendiendo al distinguido personal de que se compone la expresada corporacion y á los medios de accion de que puede disponer, despues de algun tiempo, ejercerá esa atribucion con esmero y seguridad y será mas eficaz que cualquiera otra vigilancia que pudiera establecerse. Estoy en favor del artículo en sus dos primeras partes y en contra de la tercera, por las razones que he dado. Finalmente, como inciso separado, propongo á la H. Cámara la modificacion que he indicado para el departamento de Lima.

El señor *Forero*.—Respecto á lo que acaba de decir el H. señor *García Calderon*, debo manifestarle que sus deseos pueden satisfacerse en una ley especial. Lo que se discute es general; comprende á todas las municipalidades de la República; y si por razones especiales, se cree conveniente hacer una excepcion, no debe figurar en la ley general, sino en la especial que al efecto se sancione. Respecto á la municipalidad de Lima, se hará lo que convenga, pero me parece que no debe consignarse en la ley que se discute una excepcion de carácter transitorio.

En cuanto á que las resoluciones del Concejo Provincial de Lima sean directamente revisadas por el Poder Ejecutivo, no habría á mi juicio nin-

gan inconveniente, porque existe respecto de esa municipalidad una circunstancia especialísima, cual es que, como dije ayer, se halla á media cuadra del gobierno; pero la segunda parte propuesta por el mismo Sr. García Calderon tropieza con dos gravísimos inconvenientes: 1.º con el artículo constitucional que prohíbe dar leyes especiales ó privilegiadas sin una razon especial y poderosa, como la que existe para que el Gobierno revise las resoluciones del Concejo Provincial de Lima; y 2.º con la injusticia de desnudar á la Junta Departamental de Lima, una de las primeras por su ilustrado personal, de la facultad que se concede á las demás juntas de la República. No veo razon para perturbar de esta manera la organizacion municipal.

Repto que, tratándose de una ley general, deben establecerse los preceptos que tengan ese carácter; y si es necesario una ley especial por circunstancias que la determinen y la hagan aceptable, se debe discutir el proyecto respectivo.

En cuanto al rechazo de la tercera parte del artículo en debate, porque es la repetición de preceptos constitucionales, también me parece infundado, porque en las leyes secundarias, para mejor inteligencia, se incluyen casi siempre los preceptos constitucionales, á fin de que se tengan presentes al tiempo de aplicarlas á los casos que ocurran. La repetición no es motivo para rechazar una ley que se reputa buena.

El señor *García Calderon*.—Excmo. señor, la forma no hace al caso; ya sea como adición al artículo en debate ó como ley especial, como lo propone el honorable señor Forero, aceptándose la idea, para mí es igual cualquiera que se adopte; pero entrando en el fondo de la cuestion no es óbice para la modificación que propongo el precepto constitucional. Precisamente en la Constitución se dice que se pueden dictar leyes especiales, porque lo requiera la naturaleza de los objetos, y en este caso, si se hace una excepcion para el Concejo Municipal de Lima, es necesario hacerla para todo el departamento, porque de otra manera registrarán dos disposiciones en él: una para la Municipalidad de Lima y otra para el resto del departamento; pero esta cuestion la discutiremos mas tarde, cuando llegue su oportunidad. Acepto mientras tanto la idea del honorable señor Forero que sea una ley especial.

En cuanto al rechazo de la última parte, no he dado como razon única,

como dice el honorable señor Forero, de que esa disposicion esté contenida en la Constitución; es que el artículo tal como está concebido se puede prestar á la duda de que todos los asuntos municipales necesiten pasar por todos los trámites hasta llegar al Gobierno.

Con tal motivo debo recordar á los Sres. Senadores que he dicho que en el caso de desacuerdo entre el Concejo Provincial y la Junta Departamental, para qué se ocurre al Gobierno? De modo, pues, que el artículo es peligroso, aun cuando sea repetición de la ley general, porque puede prestarse á equivocaciones; por eso estoy en contra.

El señor *Forero*.—La razon que acaba de dar el honorable señor García Calderon no se salva con rechazar la última parte del artículo: ella reclama una adición que prescriba que solo en los casos en que las resoluciones sean encontradas, se podrá ocurrir al Gobierno, ó mejor dicho, que el gobierno solo revisará cuando hayan resoluciones encontradas.

Esta es la idea que hay que formular en una adición; pero ella no autoriza á rechazar la parte final del artículo.

Yo también creo como su señoría, que una vez que la Junta Departamental encuentre aceptables los procedimientos del Concejo Provincial, no hay razon para que se sometan al Ejecutivo sin que haya de por medio alguna reclamación.

No se infiere, pues, de lo dicho por su señoría que deba rechazarse la última parte del artículo, sino que debe tener una aclaratoria, á la cual le prestaré mi voto con mucho gusto.

El señor *Canevaro*.—Yo no me he opuesto á la revision; deseo solamente que queden bien claras las cosas. Sin embargo, se me quiere hacer aparecer como opositor á la revision por las Juntas Departamentales, lo cual no es exacto. He creído que la redaccion estaba mal concebida que se podía interpretar de distintos modos la mente del autor, y juzgaba mas aceptable el artículo anterior, sin oponerme á la revision por las Juntas Departamentales.

Si en una época tuve gran empeño y defendí con calor que los actos del Concejo Provincial de Lima fuesen revisados directamente por el Gobierno, fué porque creía que esta medida era conveniente para los intereses locales y me parece haber convencido de ello á toda el mundo; pero debo declarar que no estoy sosteniendo una cuestion personal, la he defendido por convenir á los in-

tereses de la provincia de Lima, no por interés particular, como podían creerlo algunas personas.

La prueba está que sigo defendiendo la misma idea en los últimos momentos en que voy á dejar completamente y con (muy buena voluntad, el puesto que he desempeñado durante tanto tiempo en el Concejo Provincial de Lima, y espero que los señores representantes me harán el favor de creer que no tengo, repito, el menor interés personal en este asunto.

El señor *Presidente*.—La observación que hace el honorable señor Oanevaro se refiere á la última frase, y póngase ó no dicha frase esa facultad no se quita. No se está legislando sobre las Juntas Departamentales. Si se quita esa frase ¿Qué daño se hace? Ninguno; quedalo mismo.

El Gobierno inspecciona y vigila los procedimientos de la Junta Departamental, que es una institución fiscal; pero aquí no se trata de las Juntas Departamentales, ya sabemos cómo funcionan estas corporaciones y la ingerencia que el Gobierno tiene en sus procedimientos.

Si se quita esa frase ¿deja el Gobierno de tener las atribuciones que le dá la ley vigente?

N6. Luego los señores que han hablado sobre el particular, no se han fijado que el defecto está en la incoherencia de esta parte del artículo, que hace funcionar á las Juntas Departamentales como elemento del Poder Municipal.

El señor *Villanueva*.—Quitando la tercera parte no se desnaturaliza el artículo 3.º de la ley municipal; por consiguiente la comisión, para cortar esta discusión que ya se prolonga demasiado, retira la última parte.

El señor *Presidente*.—Entonces que dará el artículo así (leyó.) Si después se le quiere dar intervención al Gobierno en estos actos, es necesario ponerlo en una forma análoga.

El señor *Canevaro*.—Sirvase el señor Secretario leer el artículo, tal como estaba redactado antes por la Comisión, porque creo que esa redacción satisface perfectamente los deseos de todos.

El señor *Secretario* (leyó.)

El señor *García Calderón*.—En los dos artículos la diferencia es notable: el primero proyectado dice claramente cuáles son las funciones de los Concejos Provinciales sobre los de distrito; pero no dice sino sumariamente las funciones de las Juntas Departamentales sobre los Concejos Provinciales. Ese es el defecto que tiene el proyecto de ayer. La tercera parte le dá intervención al Go-

bierno, en el sentido que antes he dicho, cuando se apele en el caso que no haya acuerdo entre el Concejo Provincial y la Junta Departamental; pero eso será objeto de un artículo especial.

El artículo de hoy es más claro que el de ayer, porque dice terminantemente: los Concejos Provinciales inspeccionan, vigilan y revisan los actos de los de distrito, y las Juntas Departamentales inspeccionan, vigilan y revisan los actos de los Concejos Provinciales. No hay pues lugar á duda. La tercera parte se pondrá como adición ó de cualquier otro modo.

El señor *Canevaro*.—Algunos señores Sensores no se han fijado en que es notable la diferencia entre la redacción de ayer y la de hoy: la redacción de ayer dejaba á las Juntas Departamentales en la órbita de sus atribuciones, agregándole solamente una más, que era la facultad de revisar los actos de los Concejos Provinciales. La redacción de hoy es completamente distinta, porque convierte á esas Juntas Departamentales, que tienen atribuciones especiales, en Concejos Departamentales, tales como estaban establecidos anteriormente.

Esta es la gran diferencia que existe entre una y otra redacción. Según oigo por lo bajo á algunos señores, no se ha pensado sino en conservar á las Juntas en la órbita que les señala la ley y sólo concederle el derecho de revisión; pero aquí no solo se le dá ese derecho, sino se les convierte en Concejos Departamentales.

El señor *García Calderón*.—Estaría bien lo que dice el H. señor Oanevaro, si se les diera facultades especiales á estas Juntas, como las tenían los Concejos Departamentales que administraban fondos, tenían á su cargo la instrucción media y sostenían establecimientos de Beneficencia. Nada de estas cosas se les encomienda á las Juntas Departamentales, sino simplemente la vigilancia del cuerpo municipal y la vigilancia es indispensable, para llegar á la revisión. ¿Cómo se revisa un acto si no se sabe qué se ha practicado?

No he dejado ocasión de manifestar que no me parece conveniente que todos los actos que las Municipalidades practiquen, estén sujetos á revisión; pero viene otro artículo en que se expresará matemáticamente, por decirlo así, los casos en que hay lugar á revisión.

Por lo demás, no se agrega á las Juntas Departamentales una sola fa-

cultad, quedan con las mismas facultades fiscales que les dá la ley; mientras que los Concejos Departamentales, tenían veinte atribuciones, porque como he dicho sostenían la instrucción media, recaudaban rentas, sostenían establecimientos de Beneficencia, tenían gastos facultativos y obligatorios, en fin, ejercían atribuciones que hicieron de los Concejos una máquina muy complicada. Aquí no hay nada de eso; es simplemente una atribución revisora de los actos y vigilancia para que sea cumplida la ley.

Las Juntas Departamentales tienen simplemente la inspección y vigilancia para ver que los Concejos marchen en el cumplimiento del deber. No marcharon; entonces viene la revisión.

Este artículo está sentando las bases generales, los que vengan después detallarán los casos especiales. Entonces pondremos las modificaciones que satisfagan la idea que ha dominado en la discusión.

Ayer indicaba que las minorías de los Concejos pueden pedir la revisión por las Juntas Departamentales, por que es necesario que no se pierdan saludables ideas. Estos casos irán determinándose en artículos especiales; pero en esta base general se establece la inspección, vigilancia y revisión como se establecerán en artículos posteriores las modificaciones que sean necesarias.

No haya temor de que vayamos á restablecer los antiguos Concejos Departamentales. No puede pedir el restablecimiento de esos Concejos la persona que, como yo, se opuso al restablecimiento de los Concejos Departamentales; y siendo esa mi opinión franca y declarada en otro tiempo, en este momento no puede creer la honorable Cámara que tenga la mente de hacer revivir esa institución.

El señor *La Torre Gonzalez*—Estaría de acuerdo con la comisión y daría mi voto al artículo, si no se encontrara incompleto, porque la comisión no habla de aquellos casos, en que las Juntas Departamentales no han llegado á establecerse desde el año 86, como sucede en el departamento de Loreto, y donde no han funcionado ni una sola vez, como en el departamento de la Libertad.

El señor *Lama G.*—La comisión no podría considerar esa excepción; su S.^a puede formular cualquiera adición para que se agregue á la ley.

A mérito de las anteriores indicaciones, la comisión modificó el artículo

en el sustitutorio en los términos siguientes:

«Art. 3.º.—Los Concejos provinciales inspeccionan y vigilan los procedimientos de los de Distrito, y concurren en revisión de las resoluciones de éstos, en los casos designados en la presente ley: las mismas funciones ejercen las Juntas Departamentales sobre los actos de los de provincia».

Cerrado el debate se procedió á votar por partes á indicación del señor *Mujica*, resultando aprobadas las dos en que se dividió: la primera hasta las palabras en la presente ley, y la segunda lo demás que constituye el artículo.

El señor *Mujica*—Estoy en contra porque esa es una utopía; es imposible, á mi juicio, que las Juntas Departamentales vigilen á los Concejos Provinciales.

Los señores *Canevaro*, *La Torre Gonzalez* é *Ibarra* pidieron que constara que habían votado en contra.

El señor *Carranza*—No sé si será aun tiempo de hacer una observación; pero si V. E. me permite, dire que al hablar de las Juntas Departamentales, se dice que éstas vigilarán á las de provincia, y se atribuyen á las Juntas Departamentales funciones municipales ¿por qué no se dice: las Juntas Departamentales de descentralización fiscal? ¿por qué no se les pone el nombre que les ha dado la ley?

El señor *Villanueva*—Ese inconveniente puede salvarse en la redacción.

Se leyó y puso en debate el artículo 4.º.

El señor *Quinones*.—La comisión ha aceptado que en vez de ciudadanos se ponga vecinos.

El señor *Izaga*.—A fin de darle toda la generalidad posible, debe decirse: á los derechos de los particulares.

Dado el punto por discutido se procedió á votar y fué aprobado en los siguientes términos:

«Art. 4.º Están sujetas á revisión «todas las resoluciones contrarias á las leyes, á los derechos de los particulares y á las conveniencias de las poblaciones. Esto no impide que el Poder Judicial conozca, con arreglo á sus atribuciones constitucionales, de las reclamaciones referentes á asuntos contenciosos.»

Se puso en debate el artículo 5.º que es el mismo de la ley vigente, siendo su tenor el siguiente:

«Art. 5.º Los reglamentos de los «Concejos Provinciales, obligan á los de distrito en la parte que concierne á éstos.»

El Sr. *Forero*.—Para facilitar la revision de esta ley en la otra Cámara, pediría que se pusiera en estos casos el artículo equivalente de la ley que rije, á fin de que no se abra discusion sobre ellos. Por ejemplo ahora que se trata del artículo 5º, dígame simplemente el 8º de la ley.

El señor *Presidente*.—Como se ha presentado bajo la forma de un proyecto nuevo, tenemos que seguir el orden establecido. Hay que votarlo.

El señor *Forero*.—Hago esta indicacion, porque de otro modo se abrirá un debate en la otra Cámara sobre todos los artículos vigentes, reconocidos como buenos, lo que puede dar lugar á que se malogre la ley.

El señor *Presidente*.—Los temores de su señoría, quedan salvados acompañando la remision del proyecto aprobado con una nota explicativa.

Presidiendo el H. Sr. Quiñones se leyó y puso en debate el artículo 6.º

El señor *Forero*.—Este artículo no es otro que el 9º de la ley vigente, en que se han cambiado las palabras *Concejo Departamental* por *Junta Departamental*.

El señor *Villanueva*.—Como el artículo en debate es idéntico al artículo correspondiente de la ley que rije, me parece que V. E. no debe ponerlo en discusion, ni en votacion, porque no tiene sino un cambio de palabras: en vez de *Concejo Departamental* dice *Junta Departamental*.

El señor *Presidente*.—No podemos dejar de poner en discusion el artículo del proyecto del gobierno y si es desechado entrará el de la comision.

Sin mas observacion se puso al voto y fué desechado.

Se puso á discutir el artículo 6.º que propone la comision, y sin observacion fué aprobado en los términos siguientes:

«Art. 6.º Los Concejos Provinciales dirimen las competencias suscitadas entre concejos de distrito: las Juntas Departamentales, las que se promuevan entre Concejos Provinciales, ó entre uno provincial y otro de distrito, ó entre concejos de distrito de diferentes provincias, y el Gobierno las que ocurren entre concejos de diferentes departamentos.»

Se leyó y puso en debate el artículo 7.º del proyecto.

El señor *Bambaren*.—Si todas estas condiciones se requieren á la vez, creo que los extranjeros no podrán ser miembros de los concejos de distrito, ni de provincia.

El señor *Quiñones*.—En el proyecto que tuve el honor de presentar, se

consigna un inciso, por el que los extranjeros pueden ser miembros de esas corporaciones.

El señor *Villanueva*.—Quando llegue el momento de discutir el artículo propuesto por la comision, retiraré esa parte.

El inciso relativo á la ciudadanía ha sido en mi concepto una equivocacion. La comision no ha pensado nunca en excluir á los extranjeros del desempeño de las funciones municipales. Al contrario juzga muy útiles sus servicios.

El señor *García Calderon*.—La comision retiró el inciso primero; pero á pesar de eso me parece preferible el artículo de la comision al del proyecto. Debemos, pues, desechar el artículo 7.º del proyecto y aprobar el otro en los términos en que se ha modificado.

El señor *Quiñones*.—La comision haria bien si tuviese la bondad de aceptar el inciso 5.º que propuse, para que los extranjeros puedan desempeñar funciones municipales.

El señor *Villanueva*.—Me parece que la comision, al suprimir el inciso 1.º, que exige la ciudadanía, como condicion necesaria para ejercer funciones municipales, acepta implícitamente el proyecto del H. señor Quiñones y todavia con mas liberalidad.

Dado el punto por discutido se procedió á votar el artículo y fué desechado.

Se puso en debate el correspondiente propuesto por la comision.

El señor *Izaga*.—Encuentro demasiado exigente á la comision, al pedir que para ser municipal de un distrito debe tenerse la residencia de mas de dos años; de modo que un vecino, natural de la provincia, si le conviene trasladarse á un distrito, no puede ser municipal, si no reside allí mas de dos años.

El señor *Ward*.—Encuentro un inconveniente en el inciso 3.º que es el de fijar la cuota que deben tener los ciudadanos, para ejercer funciones municipales. Habrá muchos ciudadanos en la República que no podrán conseguir ciento cincuenta soles de renta; por eso creo que debe suprimirse esa condicion, para los que van á ser concejales en las provincias.

Con esta modificacion estará por el inciso 3.º.

El señor *Ganoza*.—Creo que sería mejor que cuando no hubiera individuos que tuvieran esa renta de ciento cincuenta soles, no hubiera concejos de distrito, sino más bien agencias municipales, dependientes de los

concejos provinciales. Así habría mayor garantía en el manejo de las rentas municipales.

El señor Carranza.—Deseo saber si la comision retira el inciso tercero, que exige dos años de vecindad en el distrito.

El señor Villanueva.—La comision lo ha retirado y conviene en que basta la residencia en el departamento, conforme a la ley antigua.

El señor Carranza.—Haré otra observacion: habiendo retirado la comision el primer inciso, pasa el segundo á ser primero y dice: «saber leer y escribir.»

El señor García Calderon.—Se ha subrogado, el primero ahora es: «ser mayor de edad.»

El señor La Torre Gonzalez.—Deseo que la comision explicara la mente que ha tenido al redactar el inciso cuarto, porque «ejercer una profesion patentada ó reconocida» no entiendo lo que quiere decir.

El señor Villanueva.—Se ha hecho esa distincion, porque no en todos los lugares de la Republica se paga patente y el reconocimiento de la industria ó profesion que se ejerce consta solo de las matriculas de las municipalidades. Si el inciso se refiriera á los que pagan contribucion por industria patentada, podrian los industriales, en los lugares donde no pagan patente, considerarse escluidos del ejercicio de las funciones municipales.

El señor Carranza.—Una de las condiciones que se exige en el inciso cuarto para ser elegible un individuo, es que pague contribucion sobre una renta que no baje de trescientos soles en las provincias y de ciento cincuenta en los distritos; pero segun la ley la tasa *minimum* para pagar contribuciones es la de trescientos soles, y toda renta que baje de esta suma, está exceptuada. ¿Cómo se podrá exigir entónces que pague contribucion quien no tiene sino ciento cincuenta soles de renta?

Se me acaba de decir que segun la ley de contribucion de prédios la tasa mínima para pagar contribucion es la de cien soles. No recuerdo bien; pero de todos modos la exigencia seria aún mas temeraria porque entónces sólo los que paguen contribucion predial pueden ser elegidos como miembros de los concejos de distrito; los que no tengan bienes territoriales, los que no paguen esa contribucion, no podran formar parte de esos concejos.

El señor La Torre González.—Oreo que quedaria el inciso mas claro, mas gramatical y mas conforme al lenguaje

de la ley, si se suprimiese este vocablo nuevo *patentado*. Si se dijera: «que ejerzan alguna profesion reconocida» podria admitirse.

Si la razon que ha habido para que se introduzca este vocablo nuevo en el inciso 4.º es que en algunas partes se paga esta contribucion y en otras no; si abraza á los que pagan y á los que no pagan, suplicaria á la comision retirara ese vocablo.

El señor Morote.—Segun las condiciones propuestas los profesores de colegios y directores de establecimientos públicos quedan eliminados del derecho de ser elegidos, por que hay necesidad de pagar contribucion sobre una renta; pero como hay profesores y directores que no la pagan, esos señores, cuyos servicios serian muy importantes quedarian eliminados de las funciones municipales.

El señor García Calderon.—Allí se ponen dos condiciones: ejercer alguna profesion ó pagar alguna contribucion, una de las dos cosas. Así es que el profesor que enseña en un colegio, aunque no pague contribucion, tiene derecho para pertenecer á esa corporacion, porque ejerce una profesion.

El señor Lama (G).—El H. señor La Torre Gonzalez propone que la comision retire la palabra *patentada*. Evidentemente, desde que basta la profesion reconocida para poder ser municipal, la comision no tiene inconveniente en aceptar la supresion.

El señor Morote.—Desearia que se consignara este requisito, si á la Oámara le parece bien: tener dos años de vecindad, porque esto es indispensable para conocer el ánimo de permanecer en el lugar y tambien, por que con dos años de vecindad la persona conocerá los intereses locales; para poder desempeñar el cargo este requisito no está demas aunque lo ha retirado la comision.

El señor Carranza.—He hecho esa observacion de que, segun la ley, toda renta que no exceda de trescientos soles no está sujeta á contribucion, por que como aquí se exige que se pague por renta de ciento cincuenta soles, se va á establecer una ley nueva. Interrogo pues á la comision. ¿Se modifica la ley dada sobre contribuciones en virtud de esa ley, ó como se entiende?

El señor Villanueva.—No se modifica la ley vigente sobre contribuciones. La mente de la comision ha sido exigir que paguen una contribucion los que deben ejercer cargos municipales, sobre una renta de ciento cincuenta soles que sobrepasa á la

cantidad que la ley requiere para el pago de contribuciones.

El señor *Carranza*.—Según la ley de contribucion sobre la renta, aquella que no exceda de trescientos soles, no está sujeta á pagar contribucion; y aquí se dice que pagarán contribucion los que tengan una renta de ciento cincuenta soles. La ley aludida dice que no pagarán y ésta dice que pagarán; se incurre, pues, en una contradiccion.

Si acaso se quiere buscar una garantía de cierta independencia ó de honorabilidad en los que han de desempeñar las funciones municipales, puede exigirse como condicion para los de distrito, el que tenga ciento cincuenta soles de renta, y de trescientos para los concejales de provincia; pero ¿á qué viene esta contribucion sobre la renta? Con esta ley aprobada, quedaría una disposicion contradictoria con otra mucho más importante que ésta, ó sea la ley de contribuciones.

El señor *Villanueva*.—La contradiccion en mi concepto sería aparente, en el fondo no la habría; pero como en la ley debe consultarse toda la claridad posible, tal vez no tuviera inconveniente la comision para aceptar cualquiera modificacion que en este orden se dignara presentar el H. señor *Carranza*.

El Sr. *Elguera*.—Yo creo que queda bien el artículo así (leyó) «ó tener una renta de trescientos soles para el Concejo Provincial y ciento cincuenta para el de distrito.»

El Sr. *Ganoza*.—Yo creo que de esa manera no se salvará nada, porque como hoy todos están obligados á pagar la contribucion personal que es directa, resultaría que todos podrían ser concejales.

El Sr. *Lama*.—Puede decirse que paguen alguna contribucion á mas de la personal.

El Sr. *La Torre Gonzalez*.—Sobre las contribuciones que se pagan actualmente, Excmo. Sr., no hay nada definido. Aquella atinencia que hace el H. Sr. *Carranza* sobre la renta que debe tener un individuo considerado como contribuyente, está en proyecto hasta ahora, porque el Ejecutivo ha hecho observaciones á esa ley. Quedan las contribuciones directas de industria y del capital movable. La contribucion sobre el capital movable se paga sobre toda renta, cualquiera que sea su clase; la contribucion de industria, según un decreto vigente el *mínimum* para pagarla es de 200 pesos ó sean 160 soles, así es que si nos aventuramos á fijar una cuota para la contribucion que haya

de pagar un individuo, para poder ser concejal, legislaríamos desde ahora sobre un punto que no está todavía enteramente definido.

Oreo que el artículo necesita meditarlo un poco mas, y sería conveniente que la Comision lo retirase, para ponerlo en términos tales que pudiera ser aceptable.

El señor *Villanueva*.—Me parece inútil, Excmo. señor, que la Comision retire este artículo para redactarlo. Consignándose solo la exigencia de una renta para poder ser municipal y determinando que la contribucion no debe ser la personal, para que los que solo pagan la contribucion personal no entren á ser concejales, no tiene por qué ser observado el artículo, y me parece que el inciso 4.º puede quedar redactado en los términos siguientes, (leyó) «ó tener una renta de 300 soles para los de provincia y de 150 para los de distrito.»

El señor *Secretario* leyó el artículo modificado.

El señor *Villagarcia*.—Tal vez hay redundancia en exigir el pago de una contribucion, porque lo que se necesita para que una persona pueda ser llamada á desempeñar las funciones de concejal es que trabaje ó que tenga una renta para vivir. El que trabaja teniendo una profesion liberal ó una industria, debe tener una renta, y eso es lo que debe determinar la ley, porque exigir el pago de una contribucion disyuntivamente y la posesion de una renta no es nada correcto; basta exigir la posesion de la renta, de esa manera no tenemos tanta disyuntiva.

Se sabrá por cierto que se tiene la renta de 300 soles, cuando el individuo pague la contribucion, pues su nombre debe constar en la matrícula respectiva. En cuanto á los 150 soles bastará la notoriedad por cuanto en algun distrito esa renta no dará mérito tal vez para el cobro de una contribucion. Así el artículo quedará más claro, llenará el objeto del legislador y no habrá redundancia en exigir el medio de probar un hecho, que constituye la condicion misma: la posesion de la renta.

El señor *Quinones*.—Me permito llamar la atencion de la Comision de Gobierno, para que se fije en el inciso 4.º del proyecto que tuve el honor de presentar. Esa redaccion consultada los dos extremos y oreo que así podría evitarse lo que acaba de indicar el H. señor *Villagarcia*.

El señor *Secretario* leyó el inciso. El señor *Lama* (G.).—Ahora que la Comision ha escuchado las opiniones

de algunos señores, suprime la segunda condicion, la de pagar una contribucion directa á más de la personal. Así es que solo queda tener una profesion ó industria conocida ó tener trescientos soles de renta para los concejales de provincia y 150 para los de distrito.

El señor *Torres*.—Yo me declaro contra e a condicion de la renta, porque como V. E. conoce bien, hay distritos enteros en que no hay individuo que tenga cien soles de renta al año. Escasamente tienen los recursos necesarios para vivir y hay sin embargo entre ellos hombres muy honrados. Exijir esa renta es reducir el cargo de municipales á cierto número de individuos en cada distrito.

El señor *Lama (G.)*.—Un distrito, en el cual no hay ciudadanos que tengan profesion ó industria reconocida ó 150 soles de renta, no merece tener municipalidad.

El señor *Presidente*.—La ley se ocupa tambien de decir que en los pueblos donde no hay individuos que reunan las condiciones que ella exige habrá agencias municipales.

El señor *Ganoza*.—En los pueblos que se encuentran en la condicion que indica el honorable señor *Torres*, no hay sino agencias municipales, porque individuos que no tienen oficio ni renta de qué vivir, no parece conveniente que vayan á ocupar puestos municipales.

Se dió el punto por discentido.

El señor *Villagarcía*.—Que la votacion se haga por partes: que se voten todos los incisos, hasta comenzar el cuarto, porque esa palabra *reconocida* debe votarse por separada.

En atencion á las diversas indicaciones hechas en el curso del debate, la comision modificó el artículo excluyendo la palabra *reconocida*.

Fué aprobado en los siguientes términos.

«Art. 7º. Para ser elegido municipal propietario ó suplente se requiere:

- «1º. Ser mayor de edad.
- «2º. Saber leer y escribir.
- «3º. Dos años de vecindad en el departamento.
- «4º. Ejercer alguna profesion ó industria reconocida, ó tener una renta anual para los concejales provinciales de trescientos soles y de ciento cincuenta soles para los de distrito.

El artículo octavo del proyecto se desechó sin debate, aprobándose en su lugar el siguiente, que propone la comision.

«Art. 8º. No pueden ser miembros de ningun concejo.

«1º. Los militares y empleados políticos, judiciales ó de hacienda en activo servicio.

«2º. Los empleados municipales, comprendiéndose entre éstos los profesores que dependan de los concejos.

«3º. Los que tengan contratas, pleitos ó deudas con cualesquiera de las municipalidades de la provincia.

«4º. Los miembros de las juntas departamentales y sus empleados.

«5º. Los incapaces.

«6º. Los procesados criminalmente con mandamiento de prision.

«7º. Los representantes y dependientes de empresas que estén bajo la vigilancia de la administracion local, y aún los socios y accionistas de ellas.»

El señor *Villanueva*.—Debe cambiarse la palabra «públicos» por *políticos*. Es un error de imprenta.

Puesto en debate el artículo noveno que la comision propone como complementario del anterior, S. E. levantó la sesion, á fin de que fuera más detenidamente estudiado dicho artículo.

Eran las 5 y 30 p. m.

Por la redaccion—

J. OCTAVIO OYAGUE.

19.ª sesion del Miércoles 20 de Agosto de 1890.

(Presidencia del H. señor Candamo.)

Abierta la sesion con asistencia de los señores Senadores: Quiñones, Ibarra, Elguera, Solar, Rosas, Bamba-ren, Samavez, Torrico, García Calderon, Recabarren, Delgado, Carranza, Morote, Lama T., García, Villanueva, Alarco A., Mujica, Castillo, Torres, Menendez, Alarco L., Muñoz, Villagarcía, Leon, Olavegoya, Oardenas, Izaga, Arbulú, La Torre González, Oñeros, Ganoza, Oñevaro, Revoredo, Najar, Lama G., Varela y Valle Vélez, Seminario, Montero, Eguiguren, Ocampo, Valdéz, Bejarano, Forero, Ward, Pinzás y Vizcarra Secretarios, fué leida y aprobada el acta de la anterior, con la observacion del señor Oñevaro, de que el artículo 4.º del proyecto fué aprobado sustituyéndose la palabra *ciudadanos* con la de *particulares*.

Se dió cuenta: